

# **El papel de las instituciones electorales como formadoras de ciudadanía.**

**Martha Elisa Nateras González**

**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales**

**Universidad Autónoma del Estado de México**

**mnaterasg@uaemex.mx**

**marnateras@yahoo.com.mx**

## **Introducción**

Una de las condiciones de la democracia tiene que ver con la actuación de la ciudadanía, pues no hay que perder de vista que la democracia es un sistema de gobierno basado en la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés colectivo. Para ello se requiere de una ciudadanía que se interese, se informe y participe en los asuntos políticos de su comunidad. Sin la participación de los ciudadanos en la vida política, la democracia carece de sentido y legitimidad.

Hoy en día, dentro del núcleo básico de todo régimen democrático se ubican las instituciones electorales, las cuales se encargan de organizar los procesos electorales. No obstante, hoy en día estas instituciones generan incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía. La crítica manifiesta más importante hacia las instituciones electorales es que han sido cooptadas por los partidos políticos y que han regresado a la centralización que caracterizaba al régimen priísta, lo que ha terminado por sacrificar los ideales más caros de la participación democrática. Esto en definitiva va en contra de la formación de la ciudadanía, la cual no encuentra incentivos para participar en los procesos políticos.

La ciudadanía es una categoría multidimensional que se puede presentar al mismo tiempo como concepto legal o como ideal político de igualdad. Asimismo, está compuesta por una serie de elementos cuya interrelación define su dinámica social en un grupo y/o contexto social determinado; el formal o institucional, el ideológico o cultural y las prácticas sociopolíticas de gobiernos y ciudadanos. Por tanto es importante considerar que

la ciudadanía se caracteriza por definir una situación de inclusión en una “comunidad de ciudadanos”. Pero esta “comunidad de ciudadanos”, no puede ser definida por el acceso a ciertas libertades individuales o por ejercer el derecho al voto, sino que se caracteriza por la existencia de un mundo común, de una forma de sociedad que va más allá de un conjunto de instituciones y de principios políticos. Esta pertenencia a una determinada comunidad también puede conducir a una participación activa en los asuntos públicos, es decir, puede conducir a una práctica política.

A partir de lo anterior, el objetivo de esta ponencia es analizar si las instituciones electorales (principalmente el Instituto Nacional Electoral) contribuyen a la formación de la ciudadanía en México.

### **La ciudadanía y su espacio de actuación**

La noción de ciudadanía posee múltiples sentidos, que tienen que ver con el concepto mismo, sus contenidos, su status, sus significados y su origen. De tal manera que, teóricamente, dependiendo del enfoque con el que se le analice, adquiere significados y valores políticos diferentes. Los significados más comunes de ciudadano están fuertemente relacionados con el disfrute de derechos, con la finalidad de proteger la libertad individual; con un conjunto de derechos y obligaciones que determinan su reconocimiento formal a una comunidad política o nación; con su pertenencia y contribución al bienestar de una comunidad y como una identidad cívica, a partir de aspectos sociales y culturales.

Como se puede observar, el concepto de ciudadanía de origen es controvertido, lo que termina dificultando su abordaje entre lo que encontramos y lo que desearíamos encontrar, es decir, entre el ser y el deber ser; lo cual requiere un esfuerzo mayor de separación analítica entre la mirada teórica y la mirada política. Por ello, hoy e día, existe una imperiosa necesidad por redefinir el concepto de ciudadano y sobre todo su espacio de actuación; pues más que una preocupación teórica es una exigencia política, debido al proceso de pérdida de la identidad política y de confianza en las instituciones democráticas.

Como concepto y práctica social, la ciudadanía está en permanente construcción, esto le ha dado varios sentidos y significados. De manera que distintos autores le asignan, teóricamente, diferentes contenidos y le imprimen, en la práctica, valores muy divergentes. Sus elementos constitutivos como pertenencia, membresía, jerarquía, igualdad, derechos y deberes cobran importancia según el momento histórico en que se asienten; por ello no se le confiere una característica en especial, pues así como puede contener todos estos elementos, a la vez puede no contener ninguno de manera particular y definitiva. No obstante, sus componentes principales se encuentran anclados a la ideología occidental, aún cuando sus contenidos y complejidades jurídicas y sociales varían en el tiempo y espacio, a partir de las cotidianidades.

Lo que si es evidente es que hoy en día, la construcción de la ciudadanía tendría que ir a la par de la construcción de la democracia, aún cuando la valorización de la ciudadanía como fundamento de la democracia sea reciente en la discusión politológica. En muchas sociedades modernas se asume la *democracia* como la forma política aceptada, reconocida y legitimada; sin embargo, hay evidencias de que ésta no es parte de la manera de ser y de vivir de las personas, ello hace necesario que se realicen esfuerzos para que las personas vinculen a la democracia a su vida cotidiana<sup>1</sup>. Son muchos los ciudadanos que siendo parte de sociedades llamadas democráticas, en sus prácticas niegan este principio y se resisten a reconocer los derechos de otros ciudadanos, puesto que sus acciones los llevan a negar a los que piensan y actúan de manera diferente. La condición de ciudadanía conlleva intrínseca dos elementos: la autonomía y la dependencia, en virtud de que el ciudadano no es un ente aislado, sino parte de la comunidad política.

Ante la cantidad de calificativos en el concepto de ciudadanía, es lógico toparse con una heterogeneidad teórica que complica su utilidad analítica y si a esto se le adiciona la importancia de respetar la diversidad propia de una sociedad democrática, la labor se torna más compleja. No obstante, el abordaje teórico sobre la ciudadanía, en el contexto de la

---

<sup>1</sup> Si se considera a la democracia más que un sistema de gobierno basado en la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés colectivo, sino también como un *ethos* (entendido como una actitud interior, una forma de ser y como base de la praxis) y una forma de convivencia que se expresa en las prácticas individuales y colectivas que las personas despliegan en la vida pública y privada, la ciudadanía tendría que ser un tema fundamental en el debate contemporáneo sobre la democratización de las sociedades.

modernidad, se puede hacer a través de tres enfoques teóricos tradicionales: el liberal, el comunitarista y el republicano.

El modelo liberal otorga mayor importancia a los derechos que a las obligaciones; esto demuestra que las garantías individuales son más importantes que los derechos sociales. Esto tiene que ver con el origen de los derechos, que al ser de origen contractual le otorgan estatus al individuo; este planteamiento es esencial para deducir hasta qué punto se está construyendo un tipo de ciudadanía pasiva, desde el punto de vista tradicional y hasta que grado la ciudadanía le otorga mayor importancia a sus intereses individuales.

La identidad, desde el punto de vista liberal, es una construcción individual, que no requiere de interacciones sociales, de ningún tipo, incluyendo las políticas, pues la autorrealización se edifica a partir de las necesidades del individuo, por consiguiente, el individuo es resultado de elecciones propias. Por tanto, la libertad tiene que ver con los deseos del propio individuo.

En relación al modelo comunitarista se destaca la importancia que le otorga a los derechos especiales, lo que termina por negar la universalidad de los derechos que promueve el liberalismo, en este sentido, la ciudadanía tiene que ver más con el espacio local, en virtud de que sus principales obligaciones son hacia la comunidad. Por tanto, el bienestar de la comunidad es más importante que la libertad o autorrealización individual y que los derechos individuales. Esta reflexión es crucial para entender la identidad comunitarista, la cual se construye a partir del sentido de pertenencia o la membresía. Por ello, las acciones del ciudadano están orientadas a la búsqueda del bien, por lo cual tiende a construir relaciones de beneficio mutuo, amistad, amor, altruismo, que lo invitan a participar en labores voluntarias y proyectos vecinales de manera activa.

La comunidad no centra su interés en construir ciudadanía, sino en socializar valores culturales de tipo comunitario, mientras que el Estado, mediante sus instituciones busca la edificación de una ciudadanía nacional, no obstante, la integración de los jóvenes a la vida nacional tiene que pasar por un proceso de individuación, en donde su nivel de preparación,

los espacios de ocio, la carrera que cursan y la vida cotidiana son elementales en este proceso.

Respecto al modelo republicano, se subraya que las obligaciones de ciudadanía están por encima de los derechos y la principal de estas obligaciones es participar activamente en la democracia, en aras del bien común y del fortalecimiento de la propia democracia. Este enfoque se orienta a la búsqueda de la igualdad, por ello considera que los derechos económicos son el fundamento de los derechos civiles, políticos y sociales.

Para este enfoque la identidad se construye en relación con el Estado, por lo que la participación en el espacio público es indispensable para la autorrealización del individuo. Esto lo lleva a anteponer el bien público sobre el interés privado. En esta lógica, el ciudadano conoce y respeta los fundamentos constitucionales de su comunidad política, y por consiguiente participa en debates sobre el bien común y busca solucionar el problema de la desigualdad social.

Tres cuestiones son primordiales en este modelo: su carga desproporcionada hacia las obligaciones; su afán por solucionar o aminorar la desigualdad, lo que termina generando otras formas de exclusión (género, edad, extranjeros, nivel académico), y la incapacidad que han mostrado las actuales democracias para satisfacer las necesidades y demandas de las sociedades, sobre todo cuando éstas se vuelven más complejas.

Las razones de abordar estas perspectivas son tres: primero, se retoma el liberalismo por el matiz individualista, universalista y de igualdad que promueve y por ser una corriente que le da supremacía a los derechos, lo que para muchos termina confeccionando una ciudadanía pasiva y dependiente. Segundo, se hace referencia al comunitarismo porque la ciudadanía en nuestro país no se ha desprendido del todo de sus orígenes comunitarios y porque su discurso gira en torno al compromiso con la comunidad, lo que produce un tipo de ciudadanía con prácticas híbridas, tanto políticas como pre-políticas. Tercero, se considera el republicanismo porque es una corriente que propugna por la construcción de una ciudadanía fuerte y comprometida con el Estado, ya que le da mayor peso a las

obligaciones, además de que la ciudadanía moderna en América Latina surge con las nacientes republicas.

En el concepto de ciudadanía se resume y concentra gran parte de las discusiones generadas por la teoría social y política en torno a los vínculos de los individuos con el Estado, así como de sus derechos y obligaciones, que adquieren a cambio de ser reconocidos como miembros plenos de una comunidad. La comprensión teleológica de la ciudadanía, a pesar de su aparente universalismo, se dirige principalmente al ciudadano en relación con el Estado particular al que pertenecen, con el cual tienen una serie de obligaciones y éste a su vez les otorga ciertos derechos.

En cualquier caso, independientemente de las distintas interpretaciones de ciudadanía, ésta se puede visualizar desde dos ángulos fundamentales: la ciudadanía como estatus y como práctica. El estatus hace alusión al lugar que el individuo tiene frente al Estado, como portador de derechos y miembro de una determinada sociedad. En cambio, la práctica va más allá de los derechos, está vinculada con las obligaciones y por tanto, con la participación de los individuos en el espacio público, es decir, a la ciudadanización del individuo.

La ciudadanización tiene que ver con la disposición de los ciudadanos a organizarse con otras personas y participar en la vida pública, está relacionada fuertemente con el concepto de ciudadanía. Si bien este concepto está asociado a la participación en organizaciones políticas, no siempre el sistema político es el referente principal. De hecho, la llamada ciudadanía activa se vincula menos con la política institucional que con las organizaciones sociales, pues esta más orientada a fortalecer el vínculo social en aras de una mejor calidad de la vida social. En este sentido, se trata de una ciudadanización de la política, es decir, de la recuperación de la política como una actividad propia de los ciudadanos. En donde la construcción de espacios ciudadanos de decisión alternativos y autónomos frente al Estado y de contrapoderes al mismo es fundamental.

Siguiendo con la discusión en torno al tipo de ciudadanía que produce cada modelo teórico, para Guillermo O'Donnell (2004), en la democracia moderna, la libertad individual garantiza la práctica de la ciudadanía ejercida en la esfera pública, donde los individuos pueden actuar colectivamente e involucrarse en deliberaciones comunes sobre todos los asuntos que afectan a la comunidad política.

O'Donnell considera que la democracia política contemporánea se acompaña de una ciudadanía de doble faz: una potencialmente activa y participativa que emerge de los derechos que le otorga el régimen democrático, y otra adscriptiva y pasiva, adquirida por el hecho de pertenecer a una nación determinada. La ciudadanía activa marca el acento en la responsabilidad personal y la participación, así como en la de procurar el bienestar de la comunidad. Tratando de desarrollar una definición de ciudadanía activa, sin perder de vista las fuertes discusiones en torno a ésta, se puede decir que la ciudadanía activa hace alusión a la pertenencia legal a una comunidad política, económica o geográfica, cuya finalidad es la correspondencia en derechos y deberes entre individuo y comunidad. Esto nos remite a pensar el proceso de construcción de la ciudadanía a partir de la democracia y de la participación electoral.

El proceso de construcción tanto de la democracia como de la ciudadanía se realizan simultáneamente en dos campos: el de los elementos objetivos —en donde se ubican las normas jurídicas, las instituciones, los recursos públicos, y las políticas— y el de los elementos subjetivos —en donde encontramos la ideología y los valores a partir de los cuales las personas se relacionan con los otros y con el Estado—. No obstante, en Latinoamérica mientras una buena parte de las normas jurídicas se fundamentan en la democracia y los derechos ciudadanos, la política y la cultura de nuestros países se basan, esencialmente, en prácticas e ideas basadas en la discriminación, la exclusión y la manipulación de las normas. El resultado es que vivimos como si fuéramos ciudadanos, en sociedades como si fueran democráticas (García, 2005b).

## **La ciudadanía: ¿tarea pendiente de las instituciones electorales?**

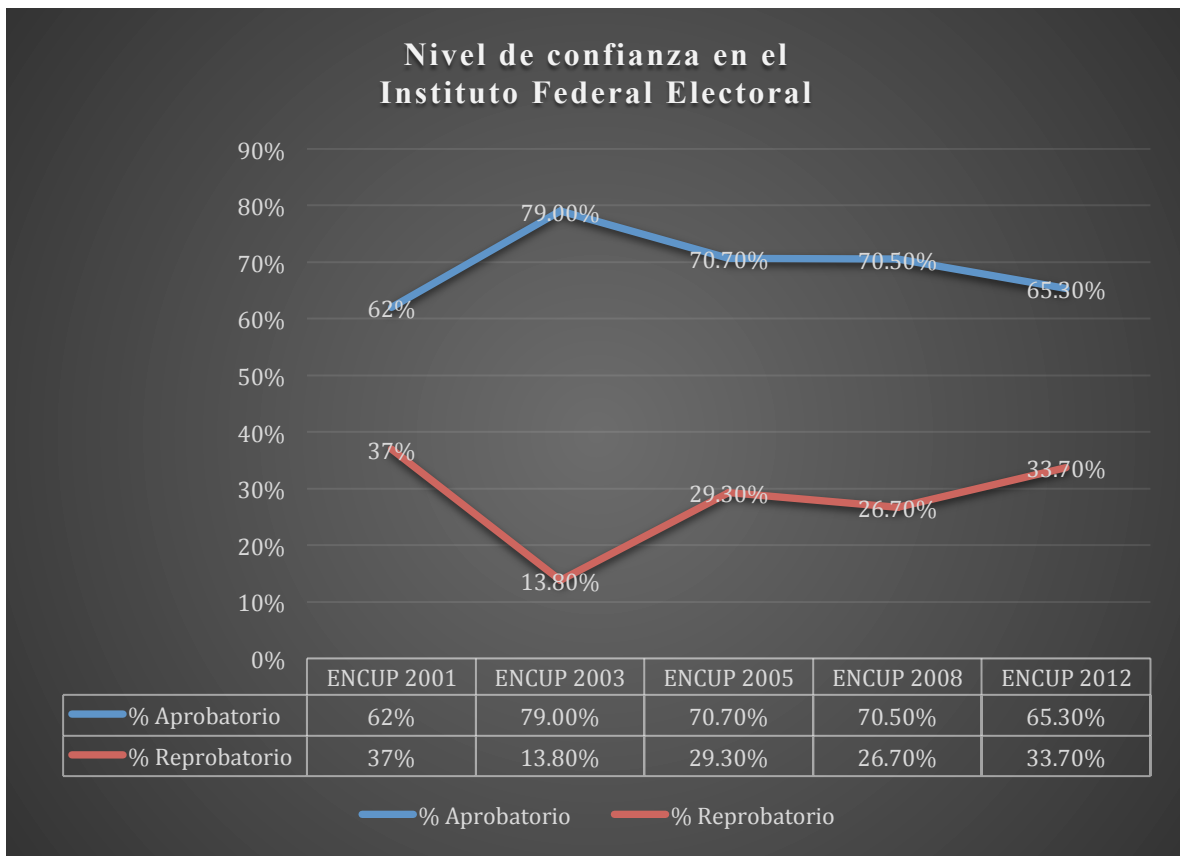
La construcción de la ciudadanía debe abordar fenómenos que lleven al redescubrimiento de lo político, a fomentar el asociacionismo civil, el incremento de la conciencia ciudadana, la construcción de valores colectivos, y de instituciones que merezcan la confianza de la población. Ante estos retos y el discurso democrático, en su afán por extender la democracia a diversos ámbitos de la vida social, ha encontrado en la idea de ciudadanía una de las nociones centrales de toda su argumentación. Por ello, la confianza en los procesos electorales en un país que concentra su actuación democrática en el sufragio, pero sobre todo en el árbitro electoral es fundamental.

El discurso democrático hace alarde de que ésta se construye con ciudadanos que participan e inciden en las decisiones políticas; sin embargo, la democracia tampoco tiene gran credibilidad, a pesar del gran despliegue discursivo en torno a la democracia como ideal, como institución o como forma de gobierno. En esta idea, cabe destacar que la proporción entre los que opinan que sí hay democracia ha decrecido, según la Encuesta sobre Cultura Política (ENCUP) en 2001 el 50% pensaba que sí vivíamos en una democracia, en la encuesta del 2003 baja a 48% y en la del 2005 baja al 37%.

Asimismo, la confianza en las instituciones electorales ha decrecido en los últimos años, como se puede ver en la gráfica No. 1, en la encuesta del 2001 la aprobación del IFE es del 62%; el momento donde tiene mayor porcentaje de aceptación en la encuesta de 2003 con 79% , pero en la del 2005 baja a 70.7%, en 2008 desciende al 70.5% y en 2012 baja aún más a 65.3% de aceptación.



**Gráfica No. 1**



Fuente: Elaboración propia, con base en los datos de diferentes versiones de la ENCUP.

Nuestras instituciones electorales dicen tener una tradición republicana, por ello intentan promover una noción sólida de ciudadanía y promueven su vinculación con la ley y al conjunto de instituciones públicas pues son las que hacen posible el ejercicio de la libertad civil. Según el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en su artículo 29 establece que entre los fines del Instituto Nacional Electoral se encuentran los de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Para cumplir con estas tareas, el artículo 58 de la misma ley señala que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas; promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los Organismos Públicos Locales sugiriendo

la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía; diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, y diseñar y proponer campañas de educación cívica en coordinación con la Fiscalía Especializada para la prevención de delitos electorales;

Como se puede observar, en el discurso del INE el status de ciudadano ya no se ubica sólo en el plano del ejercicio del derecho al voto sino que la ciudadanía se resignifica a partir de las prácticas sociales entre el Estado y los actores sociales. Por ello, hoy en día, la construcción de la ciudadanía tendría que ir a la par de la construcción de la democracia, aún cuando la valorización de la ciudadanía como fundamento de la democracia sea reciente en la discusión politológica. En muchas sociedades modernas se asume la *democracia* como la forma política aceptada, reconocida y legitimada. Sin embargo, hay evidencias de que ésta no es parte de la manera de ser y de vivir de las personas, ello hace necesario que se realicen esfuerzos para que las personas vinculen a la democracia a su vida cotidiana. Son muchos los ciudadanos que siendo parte de sociedades llamadas democráticas, en sus prácticas niegan este principio y se resisten a reconocer los derechos de otros ciudadanos, puesto que sus acciones los llevan a negar a los que piensan y actúan de manera diferente.

Pero las limitaciones de la democracia no sólo se circunscriben a lo anterior, para Barry Hindess (2002) los gobiernos de los Estados contemporáneos tienen importantes restricciones estructurales o sistémicas respecto al rol de los ciudadanos, a pesar de que parezcan internamente lo suficientemente democráticos. Esto se debe en gran medida a que las instituciones de un gobierno representativo son diseñadas para garantizar que la función de los ciudadanos se ciña estrictamente al gobierno del Estado al que pertenecen. La democracia, según esta visión, asegura cierto grado de legitimidad para las actividades prácticas del Estado y sus instituciones, y es la forma más efectiva de asegurar que la población apoye las reformas políticas y económicas que sus gobiernos requieren implementar.

Otfried Höffe (2007) considera que la sociedad cívica va más allá de una concepción de comunidad que se reduce a lo estatal, pues su objetivo es fomentar el bien común apelando a medios no gubernamentales, porque adquiere una responsabilidad de lo público. En esta lógica, el ciudadano moderno cumple un doble rol: de gobernante y gobernado. Considerando que ésta conlleva una gran dosis de auto-responsabilidad ciudadana (compromiso ciudadano) no se trata de una *civil society*, sino de una *civic society*. A esta sociedad cívica pertenecen las instituciones auto organizadas, en donde se conjuga la amistad con un alto compromiso social y persigue dos fines complementarios: abrir el monopolio estatal a la esfera de lo público y poner en práctica la idea de la democracia participativa, que conduciría a la ciudadanización de la política.

Para Höffe (2007) nadie nace habiendo tomado un compromiso con su comunidad, éste debe ser aprendido a través de la denominada “formación política”, que no se reduce a una asignatura escolar. Esta “formación política” se afianza a través del sentido cívico, que para Höffe consiste como mínimo en el sentido del derecho, la elevación a un sentido de justicia, y, como máximo el sentido comunitario. Cuando se habla de sentido comunitario muchos piensan sólo en compromiso social, pero el verdadero sentido comunitario lucha por el bien común y se opone a la separación institucional entre Estado y sociedad y contradice la tesis del creciente individualismo de la modernidad, ya que el individualismo no mina el sentido comunitario, cuando mucho transforma su organización propia.

Para desarrollar el sentido cívico Höffe considera que es necesario desarrollar tres virtudes, que no son específicas de la democracia, pero sí son virtudes cívicas en un sentido fáctico, pues contrastan con las virtudes del súbdito. Estas tres virtudes son: 1) Sentido del derecho y coraje cívico<sup>2</sup>; 2) Sentido de justicia y juicio<sup>3</sup>, y 3) Sentido comunitario.

---

<sup>2</sup> Se trata sólo de apegarse al derecho, de no cometer faltas y obedecer las leyes, ya sea por miedo al castigo o por voluntad propia (Otfried Höffe, 2007).

<sup>3</sup> El sentido de justicia aparece en tres niveles: en forma constitucional, en forma legislativa y como práctica, no obstante, el sentido de justicia como tal, se ubica en los primeros dos niveles, puesto que el destinatario del derecho es el ciudadano a él le corresponde defenderlo, no sólo por interés propio, sino a favor del bien común (Otfried Höffe, 2007).

Por su parte, Will Kymlicka y Wayne Norman (1997) consideran que una concepción apropiada de la ciudadanía parece requerir de un equilibrio entre derechos y responsabilidades, este equilibrio se logra a través de las virtudes cívicas. Para estos autores, muchos liberales clásicos creyeron que la democracia liberal podía asegurarse mediante dispositivos institucionales y procedimentales que en conjunto servirían para impedir el paso de opresores potenciales. No obstante, señalan, ha quedado más que demostrado que estos mecanismos procedimental-institucionales han sido insuficientes y que también se necesita cierto nivel de virtud y de preocupación por lo público.

El problema a resolver para Kymlicka y Norman es ¿dónde se aprenden esas virtudes? La respuesta la encuentran dependiendo del enfoque con que se analice; por ejemplo, para el liberalismo el mercado es la escuela de la virtud. Para el republicanismo y la democracia, se debe otorgar a los ciudadanos más poder por medio de la democratización de las instituciones para contrarrestar la pasividad ciudadana. Sin embargo, reconocen que el énfasis en la participación es insuficiente para asegurar que los ciudadanos participen responsablemente en la cosa pública.

Para el liberalismo, la virtud cívica tiene gran relevancia, a pesar de que a los teóricos liberales se les ha criticado por el desequilibrio que establecen entre derechos y responsabilidades, por su compromiso con la libertad, la neutralidad o el individualismo. Para esta corriente el sistema educativo juega un papel fundamental, pues a través de las escuelas se debe enseñar a los alumnos un razonamiento crítico, que les permita respetar la figura de la autoridad, pero también pensar críticamente en torno a ella. No obstante, para los tradicionalistas esto resulta peligroso, ya que esto propicia que también se cuestionen otros tipos de autoridad vinculadas con la vida privada, la tradición y la autoridad paterna o religiosa. Esto representa un dilema y una gran discusión entre los liberales, por tanto, tratan de limitar el impacto de la educación cívica sobre las asociaciones privadas y se inclinan por ajustar la educación para la ciudadanía de manera tal que no minimice el impacto sobre la autoridad paterna o religiosa. Pero por otro lado, se enfrentan al problema de que la ciudadanía al aceptar acríticamente la tradición y la autoridad, se puede ver

debilitada por las actitudes libres, abiertas, pluralistas y progresistas, que promueve el propio liberalismo (Kymlicka y Norman, 1997).

La propuesta liberal plantea que a través de una actitud cívica los ciudadanos pueden corregir actitudes contrarias a la democracia y pueden desarrollar acciones a favor de la propia sociedad. Sin embargo, una actitud cívica no depende sólo del desarrollo de programas educativos que promuevan los valores y las actitudes cívicas, o de los valores subjetivos de los ciudadanos, sino que va de la mano con el desarrollo de la ciudadanía. Esa es la visión reduccionista que tiene el INE.

Kymlicka y Norman consideran que para los teóricos de la sociedad civil, la civilidad y el autocontrol son condiciones *sine qua non* de una democracia sana y niegan que el mercado o la participación política sean suficientes para desarrollar esas virtudes. Señalan que la civilidad sólo se puede aprender a través de redes asociativas de la sociedad civil, como las iglesias, la familia, los sindicatos, las asociaciones étnicas, las cooperativas, o los grupos de protección del medio ambiente, entre otras asociaciones donde se aprenden las virtudes del compromiso mutuo. En consecuencia, una de las primeras obligaciones de la ciudadanía es participar en la sociedad civil; sin embargo, la afirmación de que la sociedad civil es “el semillero de la virtud cívica” no está plenamente comprobada<sup>4</sup>.

No obstante, reconocen que la civilidad en mucha gente tiende a ser sumisa y subordinada más que independiente y activa, lo que motiva que se tenga que reconstruir la red asociativa

---

<sup>4</sup> Larry Diamond (1997) concibe a la sociedad civil como el espacio de la vida social organizada autoinstituida voluntariamente, independiente, autónoma del Estado y limitada por un conjunto de reglas compartidas. La sociedad civil es una entidad intermediaria entre la esfera privada y el Estado, los actores en la sociedad civil necesitan la protección de un orden legal institucionalizado para preservar su autonomía y libertad de acción. De esta manera, la sociedad civil no sólo restringe el poder del Estado sino que legitima la autoridad estatal cuando ésta se basa en las reglas de la ley. La sociedad civil comprende un amplio conjunto de organizaciones, formales e informales<sup>4</sup>, es distinta de la sociedad en general, en la medida que involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar demandas al Estado, entre otras acciones. Para Cohen y Arato (2001) la sociedad civil es un espacio de legitimidad democrática, de derechos y de igualdad ante la ley, formada por tres esferas políticamente relevantes: una privada, una pública y otra social, en las que los individuos se reúnen, se asocian y hablan sobre asuntos de interés público, con la intención de influir en la toma de decisiones y por supuesto en la sociedad política. En tanto espacio democrático, la participación equitativa de todos los interesados en la discusión pública es fundamental como principio básico de la democracia.

bajo nuevas condiciones de libertad e igualdad y en su caso también hacer una corrección política, cuando las actividades de algunas asociaciones sean estrechas, parciales o particularistas. Esto significa orientar las asociaciones de la sociedad civil con los principios de la ciudadanía. Pero si bien las asociaciones pueden enseñar virtudes cívicas ésta no es su razón de ser, de hecho, la gente no se une a ellas para aprender tales virtudes. Pretender que estas organizaciones promuevan el ejercicio de la ciudadanía es ignorar su razón de ser.

### **Conclusiones**

Sin embargo, apostar por las obligaciones cívicas para generar mayor protagonismo y capacidad de intervención en sociedades donde subsisten grandes desigualdades en cuanto a derechos, poder e influencia, como la mexicana, es retornar al discurso del deber ser, pues la desigualdad y la exclusión siguen siendo un gran obstáculo para el acceso a una ciudadanía plena.

Mientras que para generaciones anteriores la ciudadanía se manifestaba básicamente a través de la participación en la esfera política, actualmente hay un auge entre la sociedad de formas de acción colectiva o actividades centradas en la solidaridad social que muestran que el sentido de la participación cívica se ha transformado. Hoy los espacios donde se expresa o materializa la ciudadanía se han ampliado y esto ha propiciado la generación de nuevas identidades y nuevas pautas de comportamiento.

Lo civil y lo cívico se han utilizado tanto como conceptos diferenciados como sinónimos. En algunos momentos no se alcanzan a percibir sus diferencias y en cambio se encuentran muchas similitudes. Esto se debe a que en la actualidad parece prevalecer una idea por combinar derechos individuales (lo civil) con los deberes para con el Estado como responsable por el bien público (lo cívico). Sea actitud civil o cívica, lo que es su contribución a la construcción de la ciudadanía, sobre todo, para definir el grado de participación o involucramiento de los individuos en los asuntos de interés general, es decir, a nivel individual o colectivo.

## Bibliografía

Cohen, Jean L. y Arato, Andrew (2001) *Sociedad civil y teoría política*. México: Fondo de Cultura Económica.

Diamond, Larry (1997) “Repensar la Sociedad Civil” en Revista *Metapolítica*, número 2, volumen 1, Abril - Junio. México: Centro de Estudios de Política Comparada, A.C.

García Moreno, Mauricio (2005b) “Ciudadanía, participación, y derechos civiles y políticos de los jóvenes y adolescentes en Iberoamérica” en *Revista Aportes Andinos. Participación y Ciudadanía*, N° 14, Julio 2005. Programa Andino de Derechos Humanos - Universidad Andina Simón Bolívar

Hindess, Barry (2003) “Los Fines de la Ciudadanía” en *Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales*, No. 16. Australia: Australian National University.

Höffe, Otfried (2007) *Ciudadano económico, ciudadano del Estado y ciudadano del mundo. Ética política en la era de la globalización*. Buenos Aires: Ed. Katz.

Kymlicka, Will, y Wayne J. Norman (1997) “El retorno del ciudadano: una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía” en *La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad. Ciudadanía El debate contemporáneo*, No. 3. Barcelona. Paidós

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Nateras González Martha (2012), *Construcción de la ciudadanía y participación de los jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de México*, México, UAEM-Miguel Ángel Porrúa.

O'Donnell, Guillermo (2004) “Acercas del Estado en América Latina contemporánea. Diez tesis para discusión” en *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de*

*ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate.* Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).